

Santiago, cinco de julio de dos mil veintidós.

VISTOS:

En esta causa RUC N° 2100557191-7, RIT N°15-2022, del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas, por sentencia de dieciocho de abril del año en curso, se condenó a Sandra Lorena Torres Marroquín, a sufrir la pena de seis años de presidio mayor en su grado mínimo, pago de multa de 2 Unidades Tributarias Mensuales, accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, como autora del delito de tráfico de drogas descrito y sancionado en el artículo 3 en relación al artículo 1 de la Ley N° 20.000. Se dispone el cumplimiento efectivo de la pena impuesta, reconociéndole los abonos que indica.

La sentencia fue impugnada de nulidad por la defensa de Sandra Lorena Torres Marroquín, recurso que se conoció en la audiencia pública del día quince de junio pasado, en la que la defensa penal privada se desistió de incorporar la prueba documental ofrecida y aceptada, incorporándose el acta que da cuenta de su realización y se determinó la fecha de lectura de la sentencia para el día de hoy.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso deducido por la defensa de Sandra Lorena Torres Marroquín, invoca en forma principal la causal del artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, denunciando como transgredidos los artículos 1, 3, 42, 43, 62 de la Ley N° 20.000, 1, 2, 11 N° 6, 11N° 9, 68 bis del Código Penal, 19 N° 2 y 3 de la Constitución Política de la República, 1 de la Ley 20.609 y 7 de la Ley 21.325, pues los sentenciadores –según afirma la recurrente– omitieron verificar la concurrencia de todos los requisitos del tipo penal materia de la condena, excluyendo cualquier referencia al informe establecido en el



artículo 43 de la Ley 20.000, que especifica que la sustancia incautada posee un 0,9% -sic- de pureza y el real daño que esta podría producir en la salud pública considerando su exigua dosificación.

Seguidamente señala, que de haber aplicado correctamente las normas invocadas, considerando el porcentaje de clorhidrato de cocaína encontrado en la sustancia incautada, los magistrados habrían concluido que los hechos establecidos configuraban el tipo penal previsto en el artículo 4 de la Ley 20.000.-

En virtud de lo anterior solicita que se anule la sentencia y, sin nueva audiencia pero separadamente, se dicte una sentencia de reemplazo que acoja las atenuantes 11 N° 6 y 11N° 9 del Código Penal, como muy calificadas, imponiéndole a su representada la pena de 4 años de presidio menor en su grado máximo, con libertad vigilada intensiva, de acuerdo al art 15bis de la ley 18.216.

SEGUNDO: Que en subsidio de la causal anterior, invoca la prevista en el artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal, consistente en la infracción sustancial, en cualquier etapa del procedimiento o en la sentencia, de derechos o garantías asegurados por la Constitución Política de la República o por los Tratados Internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes, en relación con los artículos 19 N° 1, 2 y 3, inciso quinto, de la carta fundamental, 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, defecto que hace consistir en la imposición sorpresiva y de oficio por el Tribunal de una pena superior a la de 4 años de presidio menor en su grado máximo, esto es, la de 6 años de presidio mayor en su grado mínimo, sin que en forma previa se hubiese otorgado a la defensa la posibilidad de debatir dicha mayor extensión punitiva,.



Afirma que lo anterior constituye un exceso ostensible del tribunal *a quo*, teniendo en cuenta que, los jueces de fondo se rigen por el principio de pasividad.

Finaliza solicitando se acoja el recurso por la causal invocada, imponiéndole a la acusada una pena de 4 años de presidio menor en su grado máximo, otorgándole el beneficio de Libertad Vigilada.

TERCERO: Que como segunda causal subsidiaria, la defensa de Sandra Lorena Torres Marroquín hizo valer la contemplada en el artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, reiterando por ella la vulneración de los artículos 1°, 3° y 62° de la Ley N° 20.000, 1, 2, 11 N°6, 11 N°9, 68 bis, todos del Código Penal y 15 bis de la Ley 18.216, afirmando -sin efectuar ninguna argumentación sobre la materia- la existencia de un error de derecho al aplicar a su representada una pena superior a la que legalmente le correspondía.

Finaliza pidiendo que se invalide sólo la sentencia y se dicte, sin nueva audiencia pero separadamente, una sentencia de reemplazo reconociéndole a la acusada la minorante del artículo 11 N° 6 del Código Penal, en carácter de muy calificada, sin perjuicio de considerarle además la del artículo 11 N°9 del mismo cuerpo legal, condenando a la acusada a la pena de cuatro años de presidio menor en su grado máximo, en calidad de autora del delito de tráfico de drogas descrito y se le conceda la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva por cumplirse todos los requisitos legales para ello.

CUARTO: Que, respecto a la errónea aplicación del derecho en el establecimiento del delito de tráfico ilícito de estupefacientes, que fue denunciada por la recurrente, los jueces del fondo asentaron en el fundamento quinto del fallo recurrido que: “El día 11 de junio del 2021, aproximadamente a las 14:45 horas, en circunstancias que personas de la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones de Chile, con la asistencia de ejemplares



caninos, efectuaban un control aleatorio de los pasajeros, en el aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo de esta ciudad, los cuales descendían del vuelo N° 401 de la empresa “ Sky” proveniente de la ciudad de Puerto Montt, uno de dichos canes señaló a una de las pasajeras, mostrando gran interés en ella, respecto de quien al efectuarle un control de identidad, resultó ser Sandra Lorena Torres Marroquín de nacionalidad Colombiana, y al proceder a la revisión de su vestimenta, se le encontró adosado a su cuerpo, mediante plástico transparente tipo “alusa”, en su abdomen y espalda, 4 bloques de distintos tamaños en forma rectangular, cubiertos con cinta adhesiva café, en cuyo interior se contenía una sustancia en polvo, color blanco, a la cual se le efectuó una prueba de campo y arrojó coloración positiva para clorhidrato de cocaína, cuyo peso total resultó ser 2.723, 68 gramos, los cuales transportaba. Asimismo, se le procedió a incautar un teléfono celular marca “Huawei “negro, un voucher de la empresa “Sky “y la suma de \$ 79.000.- en dinero efectivo. Posteriormente, la sustancia encontrada, al ser analizada en el laboratorio, resultó ser clorhidrato de cocaína al 9 %”.

Estos hechos fueron calificados por el Tribunal como constitutivos del delito de tráfico ilícito de estupefacientes, previsto y sancionado en el artículo 3° en relación con el artículo 1° de la Ley 20.000. Para dicho efecto, los magistrados tuvieron en consideración las pericias químicas incorporadas en la audiencia de juicio oral, que detallan desde el conocimiento científicamente afianzado que las muestras examinadas correspondían a 2.723, 68 gramos netos, de clorhidrato de cocaína al 9 % de pureza, -y no 0,9% como erróneamente afirma el arbitrio-, unido al informe sobre los peligros para la salud pública igualmente allegado, que refiere que la sustancia incautada genera graves efectos nocivos en las personas y que se encuentra incluida



expresamente en el artículo 1º del Decreto N°867 del Ministerio de Justicia del 19 de febrero de 2008.

QUINTO: Que, para resolver adecuadamente la causal principal impetrada por este recurso, cabe destacar que el tipo penal por el cual fue condenada la imputada contenido en el artículo 3º de la Ley N° 20.000, dispone: *“Las penas establecidas en el artículo 1º se aplicarán también a quienes trafiquen, bajo cualquier título, con las sustancias a que dicha disposición se refiere, o con las materias primas que sirvan para obtenerlas y a quienes, por cualquier medio, induzcan, promuevan o faciliten el uso o consumo de tales sustancias. Se entenderá que trafican los que, sin contar con la autorización competente, importen, exporten, transporten, adquieran, transfieran, sustraigan, posean, suministren, guarden o porten tales sustancias o materias primas.”* Por su parte el artículo primero de la ley en referencia alude a las sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas productoras de dependencia física o síquica, capaces o no de provocar graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud.

Por el contrario, el artículo 4º de la misma ley prescribe: *“El que, sin la competente autorización posea, transporte, guarde o porte consigo pequeñas cantidades de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas, productoras de dependencia física o síquica, o de materias primas que sirvan para obtenerlas, sea que se trate de las indicadas en los incisos primero o segundo del artículo 1º, será castigado con presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de diez a cuarenta unidades tributarias mensuales, a menos que justifique que están destinadas a la atención de un tratamiento médico o a su uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo. En igual pena incurrirá el que adquiera, transfiera, suministre o facilite a cualquier título pequeñas cantidades de estas sustancias, drogas o materias primas, con el*



objetivo de que sean consumidas o usadas por otro. Se entenderá que no concurre la circunstancia de uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo, cuando la calidad o pureza de la droga poseída, transportada, guardada o portada no permita racionalmente suponer que está destinada al uso o consumo descrito o cuando las circunstancias de la posesión, transporte, guarda o porte sean indiciarias del propósito de traficar a cualquier título.”

SEXTO: Que, como es posible advertir de las descripciones fácticas de los tipos penales en referencia, la pureza de la sustancia en el delito de tráfico de estupefacientes previsto en el artículo 3° de la ley del ramo, -a diferencia de lo que sostiene la defensa- no es una exigencia del tipo penal. En efecto, la propia Ley N° 20.000, en su artículo 63, estableció que será un reglamento el que señale las sustancias a que se refiere el artículo 1° del referido cuerpo legal, dictándose el D.S. 867 del año 2008, que reemplazó al D.S. 565 del año 1995, que comprende en su artículo 1° al clorhidrato de cocaína.

De esta manera, el portar 2.723,68 gramos netos de clorhidrato de cocaína, con un 9% de pureza, es suficiente para calificar la sustancia incautada como aquellas que constituyen el objeto material del delito de tráfico ilícito de drogas, previsto en el artículo 3 de la Ley 20.000.- La peligrosidad de la sustancia incautada y que fue cuestionada por la defensa, dada la pureza de la misma, se estableció dada su cantidad, -no discutida- 2.723,68 gramos netos de clorhidrato de cocaína, su aptitud para ser dosificada y distribuida a numerosos consumidores finales, lo que deja en evidencia, más allá de la concentración de componentes alucinógenos, la masividad potencial de su distribución, afectando de este modo, en términos de peligro concreto, al bien jurídico salud pública. (SCS N° 23245-2019 de 30 de septiembre de 2019 y Rol N° 5497-20 de 22 de septiembre de 2020).



En este estado de cosas, el objeto material del delito de tráfico de estupefacientes ha sido demostrado en el caso en comento, motivo por el cual no han errado los sentenciadores al establecer que los hechos descritos satisfacen la figura típica del artículo 3 de la Ley N° 20.000, razón por la cual este apartado del recurso de nulidad será desechado.

SÉPTIMO: Que en lo que dice relación con la primera causal subsidiaria del arbitrio impetrado, consistente en el artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal, por la cual se denuncia una vulneración al debido proceso en su vertiente al derecho a defensa, al imponerle a la acusada a Sandra Lorena Torres Marroquín una pena superior a la solicitada por el Ministerio Público sin haberle permitido debatir sobre la cuantía de la pena, -a diferencia de lo esgrimido por el recurso- según la acusación fiscal fue la de ocho años de presidio mayor en su grado mínimo, encontrándose en consecuencia, la sanción impuesta por el Tribunal tanto dentro del marco punitivo señalado por el legislador para la infracción como de la calificación acusatoria debatida en el juicio, de manera que los reproches de la defensa carecen de correlato fáctico, motivo suficiente para desestimar la presente causal.

OCTAVO: Que, sin perjuicio de lo anterior, como ya se dijo, la causal invocada por el presente acápite es la contemplada en el artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal, vinculada a la infracción del derecho a defensa, no obstante lo cual la recurrente por ella solicita el reconocimiento de minorantes de responsabilidad penal y la rebaja de la sanción impuesta, lo que no se ajusta al motivo de revisión que se esgrime e impide a estos sentenciadores entrar a su conocimiento.

En este orden de ideas, dada la contradicción evidenciada, tampoco puede prosperar la causal esgrimida.



NOVENO: Que en lo tocante al segundo motivo de nulidad subsidiario explicitado a través de la proposición de la causal de la letra b) del artículo 373 del Código Procesal Penal, que la recurrente hace consistir nuevamente en la supuesta imposición a su representada de una pena superior a la que legalmente correspondía, sin perjuicio, que no desarrolla el sustento del motivo de nulidad, lo que resulta suficiente para desestimarlos, cabe reiterar que tal como ha resuelto uniformemente esta Corte en relación a las denuncias que dicen relación con circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, su ponderación es una decisión privativa de los jueces de la instancia, labor que no puede desarrollarse en esta sede de nulidad, pues implicaría una nueva apreciación y valoración de todos los elementos que llevaron a los jueces de la instancia a la conclusión discutida por el recurso (entre otras, SCS N° 24.887-2014, de 29 de diciembre de 2014; N° 37.024-2015, de 10 de marzo de 2016; N° 16.919-2018, de 13 de septiembre de 2018; N° 131.652-2020, de 24 de diciembre de 2020 y N° 35557-2021 de 9 de agosto de 2021).

No es posible, por ello, analizar mediante este arbitrio eventuales inadvertencias sobre su concurrencia motivo por el cual esta causal también será desestimada.

DECIMO: Que por todo lo razonado, el arbitrio será rechazado.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, a lo dispuesto en los artículos 373 letra a) y b) y 384 del Código Procesal Penal, **se rechaza** el recurso de nulidad deducido por la defensa de la acusada Sandra Lorena Torres Marroquín, en contra la sentencia de dieciocho de abril del año dos mil veintidós, dictada por el del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas y contra el juicio oral que le antecedió en el proceso RUC N° 2100557191-7, RIT N°15-2022, los que, en consecuencia, **no son nulos**.

Regístrese y devuélvase.



Redacción del fallo a cargo del Abogado Integrante Sr. Munita.

Rol N° 12776-22

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros. Sres. Haroldo Brito C., Leopoldo Llanos S., Sra. María Teresa Letelier R., y los Abogados Integrantes Sres. Diego Munita L., y Ricardo Abuaud D. No firma el Ministro Sr. Llanos, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar con feriado legal.



En Santiago, a cinco de julio de dos mil veintidós, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

